

**REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  
SALA LABORAL**



**SECRETARÍA**

**EDICTO**

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

**HACE SABER:**

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Radicación:	05001310501820160089701
Proceso:	Ordinario
Demandante:	JESÚS ANÍBAL CORREA MÚNERA
Demandado:	COLPENSIONES
M. P.	MARIA PATRICIA YEPES GARCIA SL TSM
Fecha de fallo:	23/06/2023
Decisión:	CONFIRMA

El presente edicto se fija por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibidem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 26/06/2023 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

**RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS**  
Secretario



REPÚBLICA DE COLOMBIA

SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, veintitrés (23) de junio de dos mil veintitrés (2023)

DEMANDANTE	JESÚS ANÍBAL CORREA MÚNERA
DEMANDADA	COLPENSIONES
ORIGEN	Juzgado Dieciocho Laboral del Cto. de Medellín
RADICADO	050013105018-2016-00897-01
TEMAS	Reliquidación pensional
CONOCIMIENTO	Consulta
ASUNTO	Sentencia de segunda instancia

En la fecha y hora señaladas, la Sala Sexta de decisión Laboral, integrada por los Magistrados ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, LILIANA MARIA CASTAÑEDA DUQUE y la Ponente MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA, al tenor de lo dispuesto en el artículo 13 de la ley 2213 de 2022 profiere sentencia escrita, dentro del proceso ordinario laboral promovido por JESÚS ANÍBAL CORREA MÚNERA contra LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES-.

En atención al memorial aportado vía electrónica el 18 de abril de 2022<sup>1</sup> suscrito por Fabio Andrés Vallejo Chanci en calidad de representante legal de la sociedad Palacio Consultores S.A.S, se reconoce personería a la abogada Ingris Ruidiaz Soto, identificada con CC 1.085.169.921 y portadora de la T.P. 240.222 del C.S. de la J., para representar como mandataria sustituta, los intereses de Colpensiones. En virtud de lo anterior se revocan las sustituciones anteriores.

I. ANTECEDENTES

Hechos y pretensiones de la demanda<sup>2</sup>

El señor Jesús Aníbal Correa Múnera, formula demanda contra Colpensiones, pretendiendo: **i)** la reliquidación de su pensión de vejez conforme al Decreto 758 de 1990 a partir del 29 de noviembre de 2005. En subsidio de esta liquidación, deprecia **ii)** La reliquidación de su pensión de vejez dando aplicación a las disposiciones contenidas en

<sup>1</sup> 02SegundaInstancia, 01SustitucionColpensiones018201600897.Pdf

<sup>2</sup> 01PrimeraInstancia, 02ExpedienteDigitalizado1820160897. Pdf. Págs.2/4

la Ley 797 de 2003; **iii)** intereses de mora del art.141 de la Ley 100 de 1993 del retroactivo causado por la reliquidación o, en subsidio suyo, la indexación de la condena.

Fundamentó sus pretensiones en que nació el día 30 de junio de 1948, encontrándose afiliado al ISS hoy Colpensiones para los riesgos de IVM; siendo beneficiario del régimen de transición conforme al Art. 36 de la ley 100/93, realizando aportes a Colpensiones desde el 01 de enero de 1967 hasta el 29/ de noviembre de 2005 por cuenta de empleadores del sector público y privado. Reclamó ante el ISS el reconocimiento de la pensión vejez la cual le fue otorgada mediante resolución N°21420 de noviembre del año 2005 a partir del 29 de noviembre de 2005; Solicitó la reliquidación de la pensión de vejez teniendo en cuenta una tasa de reemplazo del 90% sobre el IBL y en aplicación del Decreto 758 de 1990 o en subsidio con lo dispuesto en la Ley 797 de 2003, en aplicación del principio de favorabilidad, procediendo Colpensiones mediante resolución GNR N°119570 del 28 de abril de 2015, a reliquidar la pensión de vejez en cuantía de \$1.056.317 para el año 2012, equivalente al 75% del IBL; Interpuso los recursos de Ley, sin que salieran prósperos, por cuando en resolución GNR 320361 del 19 de noviembre de 2015 Colpensiones confirmó la Resolución anterior.

### **Oposición a las pretensiones de la demanda**

**Colpensiones<sup>3</sup>:** Se opuso a las mismas por carecer de fundamentación fáctica y legal, debiendo probar la parte actora los supuestos de hecho y de derecho que sustentan las mismas: Excepcionó: Inexistencia de reconocer y pagar reliquidación, improcedencia de los intereses moratorios, improcedencia de la indexación, prescripción, buena fe, imposibilidad de condena en costas y compensación.

**Ministerio Público<sup>4</sup>:** Hizo su intervención en este proceso a través del procurador judicial, Dr. Carlos Orlando Velázquez Murcia, quien manifestó que las pretensiones elevadas por el actor vulneraban el principio de inescindibilidad de la norma, al pretender que se le aplicara la tasa de reemplazo del Decreto 758 de 1990 y la edad contemplada en la Ley 33 de 1985; lo que constituiría un abuso del Derecho.

### **Sentencia de primera instancia<sup>5</sup>**

El 24 de mayo de 2018, el Juzgado Dieciocho Laboral del Cto. de Medellín profirió sentencia mediante la cual **absolvió a la demandada** de las pretensiones invocadas en su contra, declarando probada la excepción de inexistencia de reconocer y pagar reliquidación. Impuso el pago de costas procesales al demandante, fijando como agencias en derecho \$350.000.

Fundamentó su decisión en que, las pretensiones incoadas por la activa configuran una posible violación al principio de inescindibilidad de la norma, contenido en el artículo 288 de la Ley 100 de 1993, al no ser procedente escoger de cada normativa lo que considere

---

<sup>3</sup> 01PrimeraInstancia, 02ExpedienteDigitalizado1820160897. Pdf. Págs.27/32

<sup>4</sup> 01PrimeraInstancia, 02ExpedienteDigitalizado1820160897. Pdf. Págs. 43/45

<sup>5</sup> 01PrimeraInstancia, 02ExpedienteDigitalizado1820160897. Pdf. Págs. 91/93

más benéfico a su caso. Citó sentencia de la H. Corte Suprema de Justicia de radicación 39155 del 21 de junio de 2011, así como la SL 39036 del 24 de abril de 2013. Indicó además, que a la actora se le viene reconociendo y pagando la pensión de vejez en aplicación de la Ley 33 de 1985, a partir de los 55 años de edad, con una tasa de reemplazo del 75%, respetándose el régimen anterior, en lo que tiene que ver con las condiciones de edad, tiempo y monto, que son los beneficios que trae consigo el régimen de transición; descartándose con ello la posibilidad de aplicar otras normas como el Acuerdo 049 de 1990 o subsidiariamente, como lo pretendía el demandante, la Ley 100 de 1993 con las modificaciones introducidas por la Ley 797 de 2003, porque precisamente, para acceder a la prestación de vejez, se atuvo al requisito de edad, contenido en una norma anterior, que era más benéfico en su caso.

### **Recurso de apelación**

Insatisfecho con la decisión adoptada, el apoderado del actor recurrió en apelación, señalando que no existe claridad sobre la aplicación del Art. 758 (sic). Manifestó que, a su poderdante, por haber laborado con el Estado en el sector público, no se le puede acumular ese tiempo con el tiempo laborado al servicio de empleadores del sector privado, debiéndose liquidar sólo el tiempo laborado al servicio de empleadores del sector público.

La A Quo, una vez escuchada la sustentación del recurso de apelación, al considerar que no atacaba de fondo la decisión adoptada y por ende, era insuficiente, concedió el Grado Jurisdiccional de Consulta.

### **Alegatos de conclusión en segunda instancia**

Una vez corrido el traslado para alegar en esta instancia, fue descorrido únicamente por Colpensiones<sup>6</sup>, manifestando que para calcular el IBL de la pensión del demandante, se hizo un análisis de la norma más favorable a sus intereses, concluyendo que era menester aplicar la Ley 33 de 1985, con una tasa de reemplazo del 75%, de conformidad con lo establecido por el Art. 1° de dicha normatividad, pues la liquidación con el Decreto 758 de 1990 que liquida el IBL con un porcentaje máximo del 90%, es aplicable única y exclusivamente a las semanas cotizadas al ISS hoy Colpensiones, encontrando en el caso concreto que, el demandante sólo cuenta con 1.163 semanas cotizadas a Colpensiones, siendo posible aplicarle una tasa máxima del 84%, razón por la cual el monto de su pensión aplicando el Decreto 758 de 1990 sería inferior al que arrojó el cálculo con la Ley 33 de 1985. Solicita confirmar la decisión de instancia.

## **II. SON CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL**

La competencia de la Sala está dada en atención al grado jurisdiccional de CONSULTA, de conformidad con lo establecido en el artículo 15, literal B, numeral 3 del CPTSS, modificado por el artículo 14 de la Ley 1149 de 2007.

---

<sup>6</sup> 02SegundaInstancia, 05AlegatosColpensiones1820160897. Pdf

Examinados los hechos y pretensiones de la demanda, así como la oposición formulada por la demandada, interpreta la Sala, que el **problema jurídico** a resolver se circunscribe a determinar **a)** si hay o no lugar a reliquidar la pensión de vejez del demandante, en aplicación del decreto 758 de 1990, a efectos de aplicar una tasa de reemplazo del 90% sobre el salario base de liquidación, o en subsidio de la Ley 797 de 2003 y si en tal sentido, procede el reconocimiento y pago de **b)** los intereses moratorios establecidos en el Art. 141 de la ley 100 de 1993, o **c)** la indexación del retroactivo pensional que se cause.

**a) reajuste de la mesada pensional del demandante / Sumatoria de semanas cotizadas con tiempos de servicio.**

No se discute que el señor Correa Múnera es beneficiario del régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, así lo reconoció la demandada en resolución N°21420 del 9 de noviembre de 2005<sup>7</sup>, por medio de la cual le reconoció una pensión de vejez en virtud del régimen de transición por acreditar 20 años de servicio con el Estado y 55 años de edad, conforme a los requisitos previstos en la Ley 33 de 1985, en cuantía de \$775.491 a partir del 29 de noviembre de 2005.

El 23 de abril de 2015 reclamó de la entidad la reliquidación de la pensión de vejez<sup>8</sup>, solicitando la aplicación de una tasa porcentual del 90% acorde a lo dispuesto en el Acuerdo 049 de 1990. Colpensiones, mediante resolución GNR 119570 del 28 de abril de 2015<sup>9</sup>, reliquidó la pensión de vejez, aplicando la Ley 33 de 1985, reconociéndole una mesada pensional en cuantía de \$1.056.317 para el año 2012, equivalente al 75% del IBL. Inconforme con la reliquidación efectuada, el demandante interpuso los recursos de Ley y, en consecuencia, la pasiva emitió la resolución GNR 320361 del 19 de octubre de 2015<sup>10</sup>, modificando la resolución recurrida en el sentido de advertir que el disfrute de la reliquidación sería a partir del 12 de agosto de 2012, negando la aplicación del Acuerdo 049 de 1990.

Así, para definir el problema jurídico planteado Considera esta Sala que, conforme lo enseña el principio de inescindibilidad de la norma, contenido en el artículo 288 de la Ley 100/83, a un afiliado no le es posible escoger de cada norma lo que considere más benéfico a su caso, para efectos de acceder a la prestación económica de vejez, pues ello iría en contra de las disposiciones legales dispuestas sobre el particular y un evidente abuso del derecho.

Frente al tema, el Honorable órgano de cierre de la justicia ordinaria, adoctrinó en sentencia SL 2843 de 2022, radicación N° 82298 del 09 de agosto de 2022, lo siguiente:

*“...El promotor del proceso reclama la aplicación del Acuerdo 049 de 1990, con el único propósito de aumentar la tasa de remplazo a la máxima que este consagra, esto es, del 90%, por superar las 1250 semanas de cotización. Sin embargo,*

<sup>7</sup> 01PrimeraInstancia, 02ExpedienteDigitalizado1820160897. Pdf. Págs. 83/88

<sup>8</sup> 01PrimeraInstancia, 02ExpedienteDigitalizado1820160897. Pdf. Págs. 9/13

<sup>9</sup> 01PrimeraInstancia, 02ExpedienteDigitalizado1820160897. Pdf. Págs. 9/13

<sup>10</sup> 01PrimeraInstancia, 02ExpedienteDigitalizado1820160897. Pdf. Págs. 14/22

*debe tenerse en cuenta que esta norma exige 60 años de edad para pensionarse en el caso de los hombres, mientras que la Ley 33 de 1985 que es la que gobierna su situación pensional en la actualidad, solo requiere tener 55 años de edad; de manera que, en dicho escenario, no es posible aplicar el mencionado reglamento del ISS, pues hay una diferencia en la edad de pensión mínima.*

*Y es que ante tal circunstancia, no resultaría dable modificar la situación de este pensionado, pues aquel inicialmente se favoreció por un régimen que le concedió la prerrogativa de pensionarse a una edad más temprana, por tanto, no puede beneficiarse de una disposición que establece una edad de pensión mayor, so pretexto de mejorar la tasa de reemplazo, ya que esto representaría modificar las condiciones pensionales del demandante que se consolidaron y nacieron a la vida jurídica, además, ello no resultaría más provechoso para el actor...”*

En el caso bajo estudio, el señor Correa Múnera se pensionó con el régimen establecido en la Ley 33 de 1985, accediendo a la posibilidad de disfrutar de la pensión de vejez desde los 55 años de edad, situación que le representó una garantía que el Acuerdo 049 de 1990 no contemplaba, no siendo dable tiempo después, cuando dicho pensionado arribó y superó los 60 años de edad, pretender la aplicación de otro régimen pensional y aplicar el Acuerdo 049 de 1990, únicamente con el fin de aumentar la tasa de reemplazo, sin el ánimo siquiera de devolver lo recibido por mesadas entre los 55 y 60 años de edad.

Cabe agregar, tal como conceptuó la H. Corte en la decisión a la que antes se hizo alusión, que no sería posible considerar para el caso del actor, *“que para efectos de la edad se favorezca de la Ley 33 de 1985 y para el monto de la prestación se beneficie del reglamento del ISS, pues ello atentaría contra el principio de inescindibilidad de la ley, el cual ha establecido que los derechos pensionales se deben definir empleando en su integridad el elenco normativo que resulte aplicable.”* Véase también, sentencia CSJ SL, 13 sep. 2011, rad. 41968, reiterada en la decisión **CSJ SL4403-2021**.

Ahora bien, en lo que respecta a la posibilidad de sumar semanas cotizadas con tiempos públicos, venía sosteniendo esta Sala de Decisión, conforme al precedente judicial construido por la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia que la vincula, que el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año no permitía la acumulación o sumatoria de semanas cotizadas con tiempos de servicio cotizados o no; sin embargo, ante la nueva composición de esa alta corporación, mediante sentencias **SL1947 de 2020 y SL1981 de 2020**, mutó ese criterio y consideró viable dicha sumatoria, reiterando tal postura en la sentencia SL2557 de 2020, al ordenar la reliquidación de una pensión de vejez.

Tal cambio jurisprudencial favorece los intereses tanto de los afiliados como de pensionados, y no atenta contra la sostenibilidad financiera del Sistema, siendo de obligatorio acatamiento para los jueces de inferior jerarquía, quienes acorde con la Constitución<sup>11</sup> y la Ley<sup>12</sup>, estamos investidos de la facultad de interpretar la demanda y calificar jurídicamente los hechos debatidos en el proceso (*iura novit curia*), y en procura

---

<sup>11</sup> Artículos 229 y 230

<sup>12</sup> Artículo 2º de la Ley 270 de 1996

de materializar el derecho a la justicia, no estamos atados a las normas jurídicas invocadas por las partes, en tanto que, como conocedores del Derecho y con miras a resolver de fondo la litis, debemos investigar y aplicar las normas que según nuestro saber y ciencia evidenciamos que regulan el caso.

De ahí, y atendiendo a que el señor Jesús Aníbal Correa Munera es beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y que de la revisión de la historia laboral aportada al proceso acredita tiempos al servicio del sector público y cotizaciones realizadas por empleadores del sector privado, resultaría *en principio*, posible la sumatoria de tiempos de servicio público y semanas de cotización, en aplicación del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, a efectos de reajustar la mesada pensional deprecada en la demanda.

Pues bien, como ya se dijo, el demandante ya goza de una prestación de vejez bajo los postulados de la Ley 33 de 1985, a partir del 29 de noviembre de 2005, por haber acreditado 55 años de edad, y que ahora pretende el reajuste de tasa porcentual al 90%, lo que implicaría, partir del 30 de junio de 2008, data en que arribó a los 60 años de edad, y un cambio de norma pensional por serle más favorable la tasa porcentual contenida en el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de 1990.

Acudiremos a lo resuelto por la H CSJ, en sentencia **CSJ SL3484-2022**, reiterada en la **SL 4036 de 2022**, donde al analizar un caso similar al de objeto de estudio por esta Sala de Decisión, concluyó en la **imposibilidad de acceder** a la reliquidación pensional bajo dicho régimen, **por haber sido pagada la prestación al pensionado previamente bajo la Ley 33 de 1985**, así lo indicó:

*“Ahora bien, con relación a la sumatoria de tiempos públicos no cotizados al ISS con semanas cotizadas a este para efectos de obtener la reliquidación pensional en los términos del Acuerdo 049 de 1990, vale recordar que la Sala en varias de sus providencias ha avalado su procedencia, como en efecto lo reiteró en la sentencia **CSJ SL2061-2021**, en donde manifestó lo siguiente:*

*[...]*

*Conforme lo anterior, conforme al Acuerdo 049 de 1990 es viable acumular los tiempos de servicios públicos que cotizó la actora a otras cajas de previsión del sector público a efectos del reconocimiento de la pensión de vejez contemplada en dicho reglamento.*

*De modo que tal criterio jurisprudencial también es aplicable al asunto en controversia, esto es, a la reliquidación de la pensión de vejez de la demandante.*

*Así las cosas, la recurrente tiene la razón en cuanto afirma que tiene derecho a la reliquidación reclamada porque el régimen pensional previsto en el Acuerdo 049 de 1990 es más favorable que aquel con el que la entidad de seguridad social accionada reconoció la pensión. (Subrayas de la Sala)*

Las anteriores consideraciones serían suficientes para la prosperidad del cargo, si no fuera porque la Sala observa que del material probatorio obrante en el plenario se evidencia que al demandante le fue reconocida y **pagada** la pensión bajo la Ley 33 de 1985, en virtud del régimen de transición, a partir del 1 de abril de 2014, es decir, en tiempo anterior al cumplimiento de los 60 años de edad exigidos para la pensión de vejez por el Acuerdo 049 de 1990.

En efecto, el recurrente nació el 30 de agosto de 1954, por lo que cumplió los 60 años de edad el mismo día y mes del año 2014, lo que significa que para la fecha en que Colpensiones ordenó el reconocimiento y pago de la pensión, 1 de abril de 2014, aun no reunía las exigencias para causar el derecho según lo dispuesto en el artículo 12 del acuerdo 049 de 1990 y, por esta razón, no tiene derecho a la reliquidación con una tasa de reemplazo del 90%, como así lo solicita.

Al respecto, conviene recordar que tanto la Ley 33 de 1985 como el Acuerdo 049 de 1990 resultan aplicables en virtud del régimen de transición, pero solo en lo que atañe a la edad, tiempo y monto, pues las demás condiciones y requisitos se rigen por las disposiciones contenidas en la Ley 100 de 1993 y, en consecuencia, se hace posible sumar tiempos públicos y privados para efecto de computar las semanas bajo cualquier régimen que cobre vigencia por la transición, con fundamento en el literal f) del artículo 13, el parágrafo 1 del artículo 33 y el parágrafo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, como lo dijo la Sala, se itera, en la sentencia CSJ SL1947-2020.

(...)

Así las cosas, mientras la Ley 33 de 1985 exigió como requisito para los hombres una edad de 55 años, el Acuerdo 049 de 1990 estableció que la edad requerida era de 60 años, con lo cual se evidencia entre los dos regímenes una diferencia de cinco años en las edades para la causación del derecho, no obstante, en principio, ello no debería impedir la reliquidación pensional basada en la sumatoria de tiempos públicos y cotizados al ISS.

Sin embargo, la reliquidación se torna improcedente cuando la prestación se reconoce inicialmente bajo la Ley 33 de 1985, pero a partir de una fecha en la cual el afiliado no había cumplido aún los requisitos del Acuerdo 049 de 1990, pues la reliquidación está cimentada en un cambio de régimen y, por ello, para que sea viable deben estar acreditados los requisitos exigidos por ambos regímenes a la fecha del reconocimiento inicial, dado que **no existe disposición legal que permita acceder a una pensión de forma temporal y hasta que se cumplan los requisitos consagrados en otra normativa.**

De esta manera, **si se accede** inicialmente al reconocimiento pensional bajo la Ley 33 de 1985 sin el cumplimiento de los requisitos del Acuerdo 049 de 1990, la reliquidación posterior resultaría contraria a derecho, **porque al pensionado ya le fueron canceladas las mesadas pensionales que se causaron bajo el régimen inicial**, las cuales, de efectuarse la reliquidación, quedaría sin soporte legal su



reconocimiento, pero, además, cualquier mecanismo de devolución, retorno o descuento a futuro de lo ya cancelado, distorsiona la aplicación efectiva del régimen de transición y pone en riesgo el funcionamiento del régimen de prima media con prestación definida.

De la misma manera, conviene advertir que diferente es la situación para las personas que inicialmente acceden a la prestación bajo la Ley 33 de 1985, pero cumplen los requisitos del Acuerdo 049 de 1990, situación que suele coincidir en el caso de las mujeres porque en ambos regímenes la edad es de 55 años y, tratándose de hombres, cuando por cualquier circunstancia no se pensionan sino hasta los 60 años o con posterioridad, eventos en los cuales sí es viable la reliquidación en comento, **ya que no se han cancelado mesadas pensionales en períodos anteriores.**

En la misma línea, los pensionados que en virtud de la transición accedieron al derecho bajo la Ley 71 de 1988, también son destinatarios de la reliquidación de la pensión en los términos del Acuerdo 049 de 1990, pues las edades tanto de las mujeres como de los hombres son idénticas en los dos regímenes, 55 años para ellas y 60 años en el caso de los hombres, razón por la cual, la reliquidación se hace posible por no haberse recibido mesadas pensionales anteriores a la fecha en que se ordena la reliquidación. (negritas y subrayado de la Sala).

De conformidad con el análisis anterior, pese a que la sumatoria de tiempos públicos y privados ya es admitida en virtud de interpretación emanada del alto órgano de cierre en la materia desde las sentencias SL1947 de 2020 y SL1981 de 2020; dadas las particularidades del sub examine, no resulta posible acceder a lo pretendido por estar acreditado que el señor Correa Múnera accedió a la prestación de vejez en virtud de la Ley 33 de 1985 con efectos a partir del año 2005, en que tenía cumplidos 57 años de edad, esto es, sin haber cumplido el requisito de edad previsto por el Acuerdo 049 de 1990, esto es 60 años, a los que arribó el 30 de junio de 2008, estando pagada la prestación desde periodos anteriores, no mediando disposición legal que habilite acceder a una pensión de forma temporal bajo los presupuestos de una normatividad hasta satisfacer los requisitos consagrados en otra, y sustentar la devolución de lo ya cancelado, en los términos expuestos por la Alta Corporación distorsiona la aplicación efectiva del régimen de transición y genera inseguridad jurídica, además de poner en riesgo el funcionamiento del régimen de prima media con prestación definida.

Por lo expuesto se **confirmará la sentencia de instancia, pero por las razones aquí expuestas.**

### III. EXCEPCIONES

Las excepciones formuladas por la entidad demandada se entienden implícitamente resueltas.

#### IV. COSTAS

Sin costas en esta instancia, por estudiarse el proceso en el grado jurisdiccional de consulta.

#### V. DECISION DEL TRIBUNAL

En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

#### RESUELVE

**PRIMERO: CONFIRMAR** la sentencia proferida el 24 de mayo de 2018 por el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral de doble instancia promovido por JESÚS ANÍBAL CORREA MÚNERA contra ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, por las razones expuestas

**SEGUNDO:** Sin costas en esta instancia, por haberse conocido el proceso en el grado jurisdiccional de consulta.

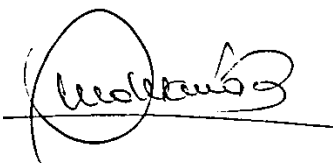
Notifíquese por edicto esta decisión.

Devuélvase el proceso al Juzgado de origen.

Las Magistradas,



MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA



ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ



LILIANA MARIA CASTAÑEDA DUQUE